

REPUBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

PROCESO	ORDINARIO LABORAL DE ÚNICA INSTANCIA
DEMANDANTE	JORGE EDUARDO CUELLAR
DEMANDADO	COLPENSIONES
RADICACIÓN	76001 4105 006 2018 00755 01
SENTENCIA	020
TEMA	INCREMENTO PENSIONAL
DECISION	SE CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN CONSULTA

Santiago de Cali, siete (7) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Conforme lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, procede la suscrita a resolver la consulta de la sentencia No. 197 del 19 de agosto de 2020, proferida por el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, dentro del proceso ordinario laboral de única instancia adelantado por JORGE EDUARDO CUELLAR contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

ANTECEDENTES PROCESALES

El señor JORGE EDUARDO CUELLAR demanda a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, con el fin de obtener el reconocimiento del incremento pensional del 14% por persona a cargo.

Refiere la apoderada del actor que COLPENSIONES mediante Resolución SUB 229327 le reconoció la pensión de vejez a partir del 2 de septiembre de 2017, como beneficiario del régimen de transición, que convive de manera permanente con la señora DORYS ROCIO CEDEÑO desde hace más de 28 años, que la compañera depende económicamente del pensionado pues no percibe salario o pensión alguna, además siempre ha sido su beneficiaria en salud, que solicitó a la demandada el pago del incremento del 14% por persona a cargo, recibiendo respuesta negativa.

COLPENSIONES se opuso a las pretensiones de la demanda señalando que al actor no se le debe reconocer el incremento por su compañera DORYS ROCIO CEDEÑO, por cuanto la pensión de vejez le fue reconocida bajo las premisas de la Ley 797/2003, la cual no contempla los incrementos por persona a cargo, sumado al hecho de que fueron derogados de manera orgánica a partir del 1 de abril de 1994, según dispuso la Corte Constitucional en la Sentencia SU -140/19.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó escrito de intervención manifestando que los incrementos pensionales previstos en el artículo 21 del Decreto 758/90 fueron orgánicamente derogados a partir de la vigencia de la Ley 100/93, tal como se expuso en la Sentencia SU-140 de 2019, razón por la cual dicha norma no produce efecto alguno respecto de quienes hayan adquirido el derecho a la pensión con posterioridad a la vigencia de dicha Ley, señala además que estos beneficios no cuentan con respaldo financiero y se oponen al Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la CP.

DECISION DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante Sentencia No. 197 del 19 de agosto de 2020, el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, declaró probada la excepción de mérito de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION propuesta por COLPENSIONES y absolvió a la entidad demandada de las pretensiones elevadas en su contra.

Como fundamento de la decisión manifestó el a-quo que no es procedente el reconocimiento del incremento por cónyuge reclamado por el señor LUIS EDUARDO CUELLAR por cuanto fue pensionado en aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 33 de la Ley 100/93 y no conforme al Decreto 758/90 que contenía el incremento pretendido.

Precisó que el artículo 21 del Decreto 758/90 preveía la posibilidad de incrementar la pensión por compañera o cónyuge a cargo, que dependiera del pensionado y no disfrutara de pensión, beneficio que no fue establecido en la Ley 100/93, que en sentencia del 16 de noviembre de 2017 dentro del radicado 110010325000200800127004108 la Sección Segunda Subsección del Consejo de Estado precisó que los beneficiarios del régimen de transición tenían derecho al reconocimiento del incremento del Acuerdo 049/90, cuando reúnan los requisitos que dicha normatividad exige, que si

bien la Ley 100/93 no dijo nada al respecto, se conservaba el derecho para los beneficiarios de la transición, lo que no se cumple en este evento por cuanto el demandante causó su derecho en aplicación de las preceptivas del artículo 33 de la Ley 100/93, no siendo objeto de debate la normatividad bajo la cual se reconoció el derecho al accionante.

Refirió que el Artículo 36 de la Ley 100/93 en virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01/05 solo estuvo vigente hasta el año 2014, fecha en la cual el actor no cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de vejez ya que a estos solo accedió en el 2015 y puntualizó que aún para los pensionados en transición no resultaban aplicables los incrementos por haber sido orgánicamente derogados según lo dispuso la Sentencia SU-40/2019.

### ALEGATOS

Fueron presentados por COLPENSIONES, quien bajo los mismos argumentos alegados ante el a-quo, solicitó se confirmara el fallo, igualmente la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado allegó escrito de intervención, en el cual indica que los incrementos fueron orgánicamente derogados a partir del 1 de abril de 1994, según lo refirió la Corte Constitucional en su Sentencia SU-140 de 2019.

Teniendo en cuenta las anteriores premisas, se pasa a dictar la

### SENTENCIA No. 020

El **PROBLEMA JURIDICO** consiste en determinar la vigencia del incremento previsto en el artículo 21 del Acuerdo 049/90 aprobado por el Decreto 758/90 y si el accionante tiene derecho al reconocimiento y pago del mismo.

### CONSIDERACIONES

El incremento pensional es un beneficio consagrado en el artículo 21 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, cuya finalidad es la de aumentar el monto de la pensión de vejez o invalidez de origen común de aquellos pensionados bajo los preceptos de dicha normatividad, lo cual excluye la posibilidad que pensionados de otros regímenes les sea aplicado dicho beneficio, dicho incremento se causa o bien por que el pensionado tenga cónyuge o compañero(a) que dependa económicamente de él y que no sea titular de una pensión o por hijos(a) menores de 16 años o de 18 años si son estudiantes o por hijos inválidos sin importar la edad siempre que dependan económicamente del pensionado, aumentando la pensión en un 14 o 7 % respectivamente.

La ley 100 de 1993, en su artículo 36 estableció lo referente al régimen de transición por lo que dispuso que aquellas personas que cumplieran determinados requisitos tenían derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, de conformidad con el régimen anterior; en tal sentido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en proveídos del 5 de diciembre de 2007, ratificó su criterio expuesto en la sentencia 21517, respecto que los referidos incrementos eran procedentes sobre las pensiones concedidas bajo el régimen de transición de la Ley 100.

Con fundamento en lo anterior el Despacho, venía sosteniendo la vigencia de los incrementos pensionales, con las normas relativas a ese incremento para los beneficiarios del régimen de transición en consonancia con lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en las sentencias con radicados No. 21.517 del 27/07/2005, No. 29.741 del 05/12/2007, No. 29.531 del 05/12/2007 y rad. No. 29.751 del 05/12/2007, en virtud de los principios de favorabilidad e inescindibilidad del derecho del trabajo, al considerar que éstos no fueron derogados tácita ni expresamente con la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993. Tal posición fue retomada y desarrollada por la H. Corte Constitucional en las sentencias T-791 de 2013, T-748 de 2014, T-123 y T-541 de 2015, T-038 de 2016, T-228 de 2018, T-088 de 2018 y T-433 de 2018, generando una línea jurisprudencial sostenida en el tiempo que admitió la validez de los referidos acrecentamientos, la cual fue recogida en la **SU-310 de 2017**.

Posteriormente, la Corte Constitucional decretó la nulidad del fallo SU-310 de 2017 y en su reemplazo profirió la Sentencia SU-140 de marzo 28 de 2019, en la que modificó su criterio y concluyó que, **salvo que se trate de derechos adquiridos antes de la Ley 100 de 1993 , el derecho a los incrementos pensionales que previó el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, desapareció del ordenamiento jurídico por virtud de su derogatoria orgánica**, advirtiendo que la derogatoria de los incrementos fue confirmada con la consagración del régimen de transición el cual se diseñó para proteger expectativas legítimas solo respecto el derecho a la pensión sin que existiera en el legislador la intención de extenderlo a derechos pensionales accesorios a la misma, entendiéndose que los incrementos no fueron dotados de naturaleza pensional, según lo dispuso el artículo 22 del Acuerdo 049/90, en igual sentido señaló que los incrementos resultaban incompatibles con el artículo 48 superior, una vez fue reformado por el Acto Legislativo 01 de 2005.

Respecto la vigencia del incremento, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia se precisó es viable reconocerlos, aun con posterioridad a la entrada en rigor de la Ley 100 de 1993, hasta el día previo a la publicación de la sentencia SU-140 de 2019, esto es el día 09 de julio de 2019 (ya que fue notificada el 10 de julio de 2019).

No obstante la anterior postura de la Sala Laboral, para esta Juzgadora resulta claro que la Sentencia SU -140 de 2019 no estableció ninguna clase de excepción, entonces, atendiendo a que se trata de una sentencia de unificación proferida por la Corte Constitucional, como máxima intérprete de la Constitución, la suscrita, actuando en consonancia con las últimas decisiones de las Cortes, relacionadas en precedencia, varía su posición inicial y **acoge en nuevo criterio, sin condicionar su aplicación a la presentación de la demanda**, puesto que las sentencias de unificación proferidas por la Corte Constitucional, como máxima intérprete de la Constitución, se caracterizan porque “son obligatorias tanto en su parte resolutiva como en su ratio decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver la controversia”. Esa “supremacía del precedente constitucional se deriva del artículo 241 de la Constitución Política, el cual asigna a la Corte Constitucional la función de salvaguardar la Carta como norma de normas”, tal y como lo estableció la misma Corporación en la Sentencia de Unificación 068 de 2018 donde indicó:

*“En materia de acción de tutela, también se ha indicado que la obligatoriedad del precedente recae en la ratio decidendi, norma que sustenta la decisión en el caso concreto y se prefigura como una prescripción que regulará los casos análogos en el futuro. En esos trámites, se realiza una interpretación y aplicación correcta de una norma superior, es decir, de los derechos fundamentales. No puede perderse de vista que en esa labor se fija el contenido y alcance de las disposiciones superiores, aspecto que hace parte del imperio de la ley reconocido en el artículo 230 de la Constitución. Aunado a lo anterior, la obligatoriedad de los fallos de tutela se desprende del principio de igualdad, pues es una forma de evitar que los jueces fallen de manera caprichosa. En efecto, “la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, en la medida en que se proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente de derecho que integra la norma constitucional”.*

Siendo así las cosas, atendiendo que los fallos de la Corte hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante para todos los operadores jurídicos, para la suscrita, el artículo 21 del Acuerdo 49/90 aprobado por el Decreto 758 del mismo no produce efecto alguno respecto de quienes hayan adquirido el derecho con posterioridad a la vigencia de la Ley 100/93, se itera, sin condicionar su aplicación a la presentación de la demanda.

#### **Caso en concreto**

En el caso en concreto se tiene que el señor JOSE EDUARDO CUELLAR fue pensionado por el ISS hoy COLPENSIONES mediante Resolución No. SUB 229327 del 29 de agosto de 2018, que obra a folio 19 del expediente, en aplicación de las disposiciones contenidas en el Artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, a partir del 2 de septiembre de 2017.

Quiere decir lo anterior que el señor JORGE EDUARDO CUELLAR no tiene derecho al incremento reclamado, dado a que su derecho pensional a la vejez NO fue reconocido en aplicación del Acuerdo 049/90 aprobado por el Decreto 758/90, sumado a lo anterior, se advierte que accedió a la pensión en el año 2017, concretamente el 2 de septiembre de 2017, es decir, en fecha muy posterior al 1 de abril de 1994, momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, donde a partir del pronunciamiento de la Corte Constitucional SU 140/19, se produjo la derogatoria de los incrementos, inclusive para las personas que se encontraban dentro del régimen de transición a que hace referencia el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En gracia de discusión, de encontrarse vigente el criterio anterior que permitía el reconocimiento del incremento, no podría reconocerse el mismo, considerando que a la accionante le fue reconocida su pensión en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y no bajo las premisas del artículo 36, lo cual no fue objeto de debate en el presente asunto.

Por las consideraciones expuestas, se confirmará la Sentencia No. 197 del 19 de agosto de 2020, proferida por el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, aquí consultada.

Dentro del contexto de esta providencia, se ha realizado análisis de los argumentos expuestos por la parte pasiva en sus alegatos.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto la Juez Quinta Laboral del Circuito de Cali, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley

**RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia No. 197 del 19 de agosto de 2020, proferida por el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia.

**TERCERO:** Devuélvase al Juzgado de Origen.

**COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

**Firmado Por:**

**Angela Maria Victoria Muñoz  
Juez  
Juzgado De Circuito  
Laboral 005  
Cali - Valle Del Cauca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f86f5d3b51066244e878e619b48554e33374c0047774e708c151823069787946**  
Documento generado en 07/02/2022 02:34:32 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**